

ha podido derogar sus disposiciones, esa declaracion conforme á derecho no es aplicable á hechos ocurridos antes de ella, porque eso seria darle efecto retroactivo contra lo prevenido en el artículo 14 de la Constitucion.

Por los fundamentos expuestos que demuestran la violacion respectiva de garantías alegadas, y teniendo en consideracion que el quejoso Sesma ha satisfecho el impuesto cuyo pago se resiste, y para cuyo no pago se solicita el amparo. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Primeró: Se confirma la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Hidalgo pronunciada en Pachuca á 29 de Julio último, declarando: que la Justicia de la Union, esceptuando al C. Serna, ampara y protege á los demas ciudadanos que han promovido este recurso de amparo, contra la providencia del Receptor de Rentas de Tepeapulco, en virtud de la cual les exige el derecho de traslacion de dominio por las fracciones que han adquirido de la hacienda de San José el Grande, segun han manifestado en su escrito primero presentado en este juicio. Segundo: se confirma la misma sentencia en la parte que desampara al C. Serna, por falta de materia para el recurso. Tercero: Se revoca el fallo en la parte que habla de daños y perjuicios á los quejosos, estándose á la declaracion que en lo general hace sobre el amparo la presente sentencia.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del*

Castillo Velasco.—*M. Aza.*—*S. Guzman.*
Luis Velasquez.—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 19 de Setiembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Antonio García, contra la orden del C. Capitan de ese Puerto, relativa á que se destruyesen las cercas que el quejoso tenía establecidas en las lagunas del Cimarron y de Mandinga.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Antonio García ha promovido este juicio de amparo y proteccion contra una orden dictada por el C. Capitan de este Puerto y ejecutada por el C. cabo de mar de Boca del Rio, Luis Martinez, para que se destruyesen las cercas que el quejoso tenia establecidas en las lagunas del Cimarron y de Mandinga con el objeto de aprovecharse de la pesca exclusivamente, de conformidad con los contratos celebrados con la Municipalidad de dicho pueblo y con los Sres. Velasco hermanos y D. Manuel A. Rojas, cuya providencia fué fundada en la jurisdiccion que le conceden el artículo 85 tratado quinto, libro sétimo de la Ordenanza general de la Armada, y artículos 7, 10, 11 y 13 título quinto de la ordenanza de matrículas; y el ocurso se apoya en los artículos 4 y 16 de la Constitucion federal y otras leyes comunes relativas á los contratos y á la manera de proceder para que puedan ser debidamente anulados. Sin embargo de no estar el ocurso suficientemente sostenido

por derecho, es indudable que el C. Capitan del Puerto no tiene ya esa jurisdiccion tan extensa que tenia por las ordenanzas que ha citado, para conocer de los negocios judiciales que suelen ofrecerse entre particulares, y ahora corresponden al conocimiento de los tribunales comunes ó federales, segun su naturaleza y circunstancias, pues son los únicos que reconoce y establece como tales la Constitucion federal en su artículo 13 y ademas los militares para las causas de esta clase; y por lo mismo no ha sido competente para administrar justicia á los matriculados de Boca del Rio contra el poseedor de las lagunas en cuestion, sino el juzgado de primera instancia del Canton con arreglo á los Códigos del Estado, ó al Juzgado de Distrito en el caso de que se justificara en juicio que las expresadas lagunas correspondian al mar territorial de la República: habiendo quedado reducidas las atribuciones de la capitanía del Puerto á los asuntos de mera policía.

Por cuyos fundamentos y sin perjuicio de lo que se determine sobre la validéz de esos contratos, considera el suscrito Promotor que debe ser amparado el quejoso contra la órden de la capitanía de Puerto, ejecutada por el cabo de mar de Boca del Rio, y pide al Juzgado que así se sirva declararlo en su sentencia. H. Veracruz, Febrero 16 de 1873.—*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Veracruz, 2 de Junio de 1873. Visto este juicio sobre proteccion y amparo que ha promovido el C. Antonio García contra las providencias del C. Capitan de este Puerto, relativas á compeler al quejoso á que destruyera las cercas que tenía establecidas en el sablazo del Cimarron, para impedir que los vecinos de Boca del Rio entraran á pescar en las lagunas que se encuentran en aquel lugar hasta la de Man-

dinga, cuyas propiendencias segun expresan, le viola la garantía individual que le concede el artículo 16 de Constitucion federal; pidiendo al mismo tiempo que se suspendiera el acto reclamado mientras se sustanciaba el juicio; el auto que recayó en que se mandó al cabo de mar de Boca del Rio que suspendiera la ejecucion de la órden que habia recibido de la capitanía del Puerto hasta nueva disposicion del Juzgado; el informe producido por el mismo empleado; los documentos y demas recados que obran en autos y lo pedido por el Ministerio fiscal.

Considerando: que segun aparece del mismo contrato que en copia ha presentado el C. Antonio García, para justificar el derecho que tiene de estar en posesion de las indicadas lagunas en representacion de una sociedad, la Municipalidad de Boca del Rio le ha concedido por el término de ocho años el exclusivo aprovechamiento de ellas para pescar, sin tener propiedad en la cosa que motiva el contrato, ni facultades legales para celebrarlo, supuesto que las expresadas lagunas pertenecen al uso público.

Que el propio contrato establece un verdadero monopolio de la pesca en beneficio de un particular y con perjuicio de la comunidad del pueblo de Boca del Rio, que en su mayor parte se ha dedicado á esa clase de industria para subvenir á sus necesidades y obligaciones.

Que cada uno de sus individuos tiene la garantía que establece el artículo 4 de la Constitucion federal, de poderse dedicar libremente á la industria ó trabajo que mas les acomode siendo útil y honesto, y de aprovecharse de sus emolumentos.

Que por otra parte, el artículo 28 de la misma Constitucion prohíbe todo monopolio y estanco, y contra esa prohibicion, no puede nacer del referido contrato la accion que ahora se intenta contra la órden del funcionario que trató de impedir el perjuicio que se causaba á los matriculados que le están subordinados conforme á las orde-

nanzas respectivas, cuya orden no atacaba tampoco los derechos de los demas vecinos, que por su parte han solicitado amparo contra el acto de la Municipalidad, de que ahora se está tratando.

Que el otro contrato que se hace valer celebrado por los propietarios de los terrenos anexos á esas lagunas, con el C. José Antonio Lopez, adolece de los mismos defectos y no puede por lo mismo coadyuvar á la accion de amparo establecida; por cuyos fundamentos de hecho y de derecho y en virtud de lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la Carta fundamental de la República y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero: La Justicia federal no ampara ni protege al C. Antonio García, contra la orden librada por el C. Capitan de este Puerto para impedir su exclusivo aprovechamiento de la pesca en el arroyo del Cimarron y la laguna de Mandinga, con perjuicio de los matriculados y de los demas que voluntariamente quieran dedicarse á esa industria.

Segundo: Queda sin efecto la suspension del acto reclamado, decretada por auto de 1º de Febrero de este año.

Tercero: Conforme á lo dispuesto en el artículo 16 de la ley citada, pagará á la Hacienda pública el quejoso, una multa de cien pesos.

Cuarto: Notifíquese este fallo; sáquense las copias prevenidas por la ley para su publicacion en el Progreso y en el Semanario Judicial de la Federacion; y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la ley. Así lo mandó y firma el C. Juez de Distrito del Estado. Lo testificamos.—*Lic. Luis G. Gomez.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia fielmente sacada de su original para remitir al ciudadano secretario del Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia para su publicacion en el Semanario Judicial; lo testificamos. H. Veracruz, Ju-

nio 3 de 1873.—*Luis G. Gomez.*—*A.*—*José María Gonzalez.*—*A.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Veracruz por el C. Antonio García por sí y á nombre de la compañía de que es socio gestor, contra la orden del capitan del puerto, que le mandó destruir las cercas y corrales que tenia construidos en el estero del «Zimarron» y Lagunas «Larga» y de «Mandinga», jurisdiccion de «Boca del Rio», alegando que esas cercas, lo mismo que los corrales, le aseguraban el aprovechamiento exclusivo de la pesca en las expresadas aguas; aprovechamiento que le fué concedido á virtud de un contrato celebrado con las autoridades del Estado, que consta en escritura pública de la que presenta testimonio; que la orden de que se queja, viola en su persona y las de sus socios la garantía que otorga la Constitucion en su artículo 16, y que el caso está comprendido en la fraccion primera, artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto el informe de la autoridad ejecutora; la orden del capitan de puerto, lo alegado y probado por el quejoso; lo pedido por el promotor fiscal, con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando:

Primero: Que las aguas de ese estero y lagunas, son saladas, se comunican con el mar y participan de su flujo y reflujo; circunstancias por las que deben reputarse como una parte del mar, aunque sus entradas no dan paso mas que á pequeñas embarcaciones de pescadores.

Segundo: Que en tales condiciones, dichas aguas no pueden estar bajo las prescripciones del derecho internacional sobre lo que se llama el *alta mar*, en el que no se

les permite á las naciones, propiedad, soberanía ni dominio alguno y que debe permanecer libre para el uso y aprovechamiento comun.

Tercero: Que el estero y lagunas referidas no forman puerto, golfo, rada, fondeadero, abrigo ni tránsito para las embarcaciones que vienen de afuera, y por lo mismo, tampoco pueden estar bajo las prescripciones del derecho internacional, relativas á esa faja ó zona mas ó menos ancha del mar que se extiende á distancia de las costas, en la que si bien se reconoce á las naciones la soberanía, en cuanto lo requiere su seguridad y defensa, todavia se les limita para el uso y aprovechamiento comun, especialmente en interes de la nacion.

Cuarto: Que en consecuencia, el estero y lagunas citadas, quedan de lleno bajo el dominio de la nacion y están bajo su soberanía absoluta.

Quinto: Que en ejercicio de esa soberanía y en uso de las facultades concedidas por las fracciones IX, X, XV, XVI y XXII, artículo 72 y sus concordantes; los poderes de la Union mantienen como vigente la antigua legislacion española, referente á esas materias en la parte que no ha sido derogada ó modificada por la misma Constitucion ó leyes posteriores.

Sesto: Que conforme á esa legislacion (ley tercera, título veintiocho, partida tercera,) el mar es uso y aprovechamiento comun, y por las constancias de estos autos aparece que, en efecto, el estero y lagunas de Boca del Rio siempre han tenido ese destino, salvo el privilegio, monopolio ó estanco que las antiguas ordenanzas de la Armada Nacional y de matrículas, establecian á favor de la *gente de mar* obligada al servicio de la marina; privilegio que debe reputarse abolido por el artículo 28 de la Constitucion.

Sétimo: Que conforme á esa misma legislacion, (artículo sexto hasta el diez y siete inclusive, artículo ochenta y cinco título sétimo, tratado quinto de las Ordenanzas generales de la Armada Nacional; artículo

diez y nueve, título primero y artículo diez, título quinto de la Ordenanza de Matrículas; conformados y explicados en disposiciones posteriores), ha estado en las facultades y atribuciones del capitan del puerto, el mandar destruir las cercas, corrales ú obstáculos que impedían la navegacion y la pesca en el estero y lagunas cuestionadas, si bien no ha debido negar á García y sus socios, á pretexto de no ser *matriculados*, el derecho de navegar y pescar en esas aguas, abolido como está el privilegio de las matrículas.

Octavo: Que aun cuando las demas facultades que comprende la soberanía, y que la Constitucion no ha concedido expresa ó implícitamente al poder federal, deben entenderse reservadas á los Estados, (artículo 117); tales facultades no pueden llegar jamas hasta el grado de que los Estados dicten leyes, reglamentos ó disposiciones abiertamente opuestas, como sucede en el presente caso á las que han dictado los poderes de la Union en las materias de su competencia.

Noveno: Que si fuera el caso como lo han entendido las autoridades de Veracruz, de reputarse á García y socios como *inventores ó perfeccionadores de alguna mejora*, al poder federal y no al estado correspondería la declaracion del privilegio respectivo; segun la escepcion del artículo 28 y la fraccion XXVII del artículo 72 de la Constitucion.

Décimo: Que lo que realmente importa al caso de García y socios, es la decision de si conviene ó no reducir el estero y lagunas de «Boca del Rio» á una propiedad ó aprovechamiento particular, ya sea por un tiempo determinado ó á perpetuidad.

Undécimo: Que esa decision es de la competencia del poder federal por ser él quien mantiene y conserva esas aguas, como debe ser para el uso y aprovechamiento comun; mientras no se demuestre que este es nulo ó insignificante comparado con el

bien público que se obtendría por la apropiación.

Duodécimo: Que mientras no haya y se demuestre tal ventaja en la apropiación de esas aguas, como la hay y se ha demostrado y aceptado generalmente en la apropiación de las tierras, ni el poder federal ni el del Estado pueden conceder la propiedad de dichas aguas; porque ella importa un privilegio, monopolio, ó estanco, aunque puramente local, de los que prohíbe el artículo 28 de la Constitución, en consonancia con el artículo cuarto.

Por las razones y fundamentos expuestos y con apoyo en los artículos 101 y 102 de la Constitución, se resuelve: Primero: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Veracruz, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Antonio García y sus socios, contra la orden del capitán de Puerto, que mandó destruir las cercas y corrales que impedían la navegación y la pesca en el estero del Zimarrón y lagunas Larga y Mandinga.

Segundo: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Antonio García y sus socios, contra la misma orden del capitán de Puerto, en la parte que les niega, por no ser matriculados, el derecho de navegar y pescar en esas aguas.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*José María del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Guzmán.*—*L. Velásquez.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Setiembre 24 de 1878.

—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por el C. Marcos Dueñas, contra su consignación al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Administrador de esta Aduana marítima que suscribe, en uso de la voz fiscal, por ausencia legal del C. Promotor de ese Juzgado, dice: que según lo que aparece de las presentes diligencias, el C. Marcos Dueñas expone en su escrito de fojas primera de este expediente, que fué conducido del pueblo de Aldama á este Puerto desde Diciembre de 1871, y consignado al servicio de las armas sin su voluntad, por orden del C. Gerardo Ostos que fungía de Presidente del Ayuntamiento de dicho pueblo; y que siendo tal providencia atentatoria contra la principal garantía de las que otorga la Constitución al C., como es la de *gozar de su libertad*, pide amparo contra dicha providencia solicitando se le exonere del servicio militar, y se le mande poner en absoluta libertad. Pedido el correspondiente informe al C. Comandante militar de esta Plaza, este funcionario contesta en su oficio de fojas 4, que en efecto dicho C. Dueñas fué consignado por el referido Presidente del Ayuntamiento de Aldama al servicio de las armas en Diciembre de 1871. En este informe no constan datos ni se han acompañado documentos que comprueben el dicho del Gefe que lo produjo; pero es de presumirse que haya tenido á la vista cuando menos su libro de novedades, en donde se llevan las al-